

Colombia: ¿país sin memoria?

Pasado y presente de una guerra sin nombre

Sven Schuster / Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, Alemania

Resumen

La guerra civil no declarada de los años 40 y 50, conocido bajo el nombre genérico de La Violencia, ha sido el conflicto más devastador y sangriento en la historia de Colombia. No obstante, ha dejado muy pocas huellas en la memoria histórica. A continuación voy a aclarar si esto se debe a un “pacto de olvido” como sostienen algunos investigadores. Para ello mostraré cómo las élites políticas trataron el tema en los debates parlamentarios, en la prensa, en la historiografía oficial y en los libros de texto durante el primer gobierno del Frente Nacional (1958–62). Aparte de esto, quisiera enfocarme en el papel de las amnistías y de las así llamadas Comisiones de la Violencia.

Palabras clave: Colombia, Guerra Civil, *La Violencia*, Frente Nacional, Memoria Histórica, Siglo XX.

Abstract

The non-declared civil war of the 1940ies and 50ies, generally known as *La Violencia*, is considered to be the turning point in Colombia's recent history. Nevertheless, it seems that the conflict didn't have much impact on historical memory. Is this the result of an elitist “pact of oblivion”, as some scholars affirm? In the following I will focus on the official suppression of critical voices in the aftermath of war, putting emphasis on the first National Front government (1958-62). The analyzed sources include congressional debates, the press, official historiography and schoolbooks. Alongside, I will also concentrate on the role of amnesty laws and the so called *Comisiones de la Violencia*.

Key Words: Colombia, Civil War, *La Violencia*, National Front, Historical Memory, 20th Century.

1. Introducción

Es casi un lugar común afirmar que Colombia es un país sin memoria. En seguida quisiera plantearme la pregunta a qué se debe esto, y qué tan cierta es la hipótesis de que la “amnesia colectiva” sufrida por la sociedad colombiana nace del trauma de una violencia sin fin. ¿No se trataría más bien del resultado de unas políticas que tuvieron como objetivo eliminar las raíces históricas de un pasado “incómodo”?

Mi enfoque en este ensayo está en la guerra civil de los años 40 y 50, generalmente llamada La Violencia, aparentemente por falta de una denominación apropiada¹. Este interés particular tiene que ver con mi interpretación personal del conflicto, según la cual se trata de una especie de “pecado original” del siglo XX, de alguna manera comparable a la Primera Guerra Mundial en Europa, la cual nos llevó directamente a la Segunda. Para no dejar ninguna duda, tampoco pretendo “comprobar” aquí la no-existencia de La Violencia u otros conflictos en la memoria colectiva. Al contrario, desde La Violencia hasta la Toma del

Palacio de Justicia encontramos en Colombia un sinnúmero de hechos históricos sangrientos, cuyo recuerdo sobrevive en las narraciones orales de los pequeños grupos sociales, en la cultura popular, así como en el mundo académico. No obstante, ninguno de estos hechos “incómodos” juega hoy en día un papel importante en la memoria histórica de la nación. ¿Esta ausencia solamente se debe a un trauma difuso? Sinceramente, no lo creo.

Vaclav Havel, el famoso escritor anticomunista y ex-presidente de República Checa, dijo hace poco en una entrevista con *El País* (Madrid) que sin memoria no podría existir la continuidad histórica ni se mantendría la identidad (21 de septiembre de 2008). A la luz de las experiencias de los países del antiguo Bloque del Este, ciertamente tiene razón. Aunque muchas veces no haya un consenso definitivo acerca de la representación simbólica del pasado en aquellos países, amplios sectores de la sociedad civil y – en algunos casos – el propio Estado luchan por una nueva narración nacional, basada en un acuerdo amplio sobre los hechos claves de la historia. En consecuencia, esta narración negociada se vuelve el fundamento de la cohesividad social, aún más en países que sufren desigualdades económicas y sociales extremas. En la llamada “Europa Vieja” (George W. Bush) hay en la actualidad varios ejemplos de cómo las élites y/o la sociedad luchan o conviven con un pasado “incómodo”. En este lugar quisiera destacar los casos de España y Alemania, debido a que representan dos polos opuestos. Por un lado, en España no existe una interpretación compartida por todos los ciudadanos acerca de la Guerra Civil de los años 30. En el actual debate sobre su significado participan – muchas veces de manera polémica – políticos, periodistas, intelectuales, académicos y ONG, los cuales hacen uso de la historia para defender sus intereses particulares y fines políticos. En Alemania, al contrario, existe un amplio consenso acerca de la interpretación del Tercer Reich, y en estos años, en los que desaparecen los últimos testigos de la época, observamos un verdadero *boom* de la memoria.

Algo parecido podría decirse de Argentina, Chile, Irlanda, Sudáfrica, así como de los países de la antigua Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, etc. En todos estos casos se registran numerosas publicaciones académicas sobre el tema, se inauguran museos o monumentos, y se realizan proyectos de gran impacto público con el fin de preservar la memoria histórica, aunque sea “incómoda” para ciertos grupos en el poder. ¿Y en Colombia? Francamente, se ha hecho muy poco. Aparte de algunos esfuerzos desde el seno de una sociedad civil fragmentada, y salvo las labores de diferentes comisiones estatales – como por ejemplo la actual *Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación*, las raíces históricas del conflicto no han encontrado su representación adecuada en el espacio público. Esto es especialmente cierto en el caso de La Violencia, al cual me voy a referir en los siguientes párrafos. Quisiera tomar esta “guerra histórica” como punto de partida para averiguar por qué un pasado con tantas consecuencias no ha generado el mismo impacto en la memoria

como en los países anteriormente nombrados. Si uno piensa en la época de La Violencia, es decir la guerra más sangrienta en la historia de Colombia y cuyos efectos se hacen sentir todavía hoy, ¿no es extraño que un conflicto tan devastador haya dejado tan pocas huellas en la memoria histórica? Sobre todo ahora, en un momento en que la generación que ha vivido el 9 de abril de 1948 y la consiguiente guerra civil se está desvaneciendo, ¿no parece aún más raro que haya tan pocas representaciones simbólicas de esa época? ¿A qué se debe esto? ¿Es entonces justo afirmar que Colombia es un país sin memoria?

2. Lugares de memoria y memoria histórica

Una de las obras más influyentes acerca de la formación de la memoria histórica es sin duda la monumental *Les lieux de mémoire*, del historiador francés Pierre Nora. En ella describe cómo la memoria colectiva de grupos sociales limitados es transmitida por medio de la tradición oral. Sin embargo, este tipo de memoria de carácter comunicativo deja de existir en cuanto se mueren sus portadores, por lo cual las generaciones venideras, sobre todo a partir del auge del Estado-nación moderno, tienden a erigir “lugares de memoria” con el fin de preservar el contenido básico de sus narraciones colectivas (Nora, I, XVII-XLII). Según Maurice Halbwachs, el precursor más importante de Nora, la memoria en sí es siempre una construcción social, por lo cual cambia de forma constantemente y se distingue de la historia académica, cuyo propósito sería la objetivación de los hechos con el fin de presentar la “verdad histórica” (Halbwachs, 273-296). Nora incluso afirma que la verdadera misión de la historia académica consiste en la destrucción de la memoria.

Aunque esta oposición estricta entre memoria e historia parece algo exagerada, las ideas de Nora se destacan por su utilidad heurística. Según él, la memoria histórica se constituye por medio de elementos sustitutos materiales o inmateriales, cuya función es la conservación de la memoria colectiva perdida. Los “lugares de memoria” son entonces monumentos, museos, cuadros o murales, pero también fechas, conmemoraciones o aniversarios. Ciertos grupos sociales, por ejemplo las élites políticas o actores subalternos, se apoyan en ellos para imponer su visión del pasado, casi siempre con la intención de legitimar algún proyecto político. Según Nora, la institucionalización de la memoria ocurre por lo general en fases de un cambio generacional, sobre todo cuando se mueren los últimos representantes de una generación reconocida como “importante” por amplios sectores de la sociedad.

A mi juicio, la ausencia del tema de La Violencia en Colombia tiene su origen en los primeros años del gobierno del Frente Nacional que se instaló a finales de los años 50. En las siguientes líneas voy a mostrar cómo las élites políticas de la época manejaron el tema y cuáles han sido los efectos para la memoria histórica del país, es decir en la esfera institucional y pública. Al igual que Marco Palacios, parto de la idea de que las imágenes básicas que todavía ordenan nuestras concepciones sobre La Violencia se forjaron en aquellos años (Palacios, 191).

Aceptando la idea de un “pacto de olvido” – expresión adoptada por el periodista y escritor Antonio Caballero (Caballero, 7 s.) – se pueden formular las siguientes preguntas respecto a la no-representación de La Violencia en el imaginario colectivo:

¿Dónde está el lugar de La Violencia en la memoria histórica?
 ¿Dónde se encuentran los monumentos que recuerdan a las víctimas? ¿Por qué la responsabilidad histórica de las élites no forma parte del discurso histórico dominante, como es difundido por los medios masivos, en los museos o los libros de texto?

Para desenlazar la construcción de una memoria histórica dominante es entonces indispensable un análisis de la posición oficialista como se manifiesta en la así llamada “gran prensa”, los debates parlamentarios, la historiografía, los manuales escolares, así como las leyes de amnistía y las Comisiones de la Violencia. Ante todo, sin embargo, es necesario echar una mirada, aunque rápida y esquemática, a la historia misma.

3. De la guerra civil a la paz negociada

Aunque no haya un consenso definitivo acerca de la periodización de la época de La Violencia, la mayoría de los historiadores coincide en limitarla al período comprendido entre 1946 y 1964. Pese a que la peculiar denominación insinúa de alguna manera una etapa histórica homogénea y bien limitada, no es ese el caso. Al contrario, hoy en día se diferencian por lo menos tres fases de La Violencia. La primera está representada por la lucha partidista de los años 40, la cual culmina en el asesinato del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán y la consiguiente destrucción de Bogotá el 9 de abril de 1948. Hacia los años 50 se transforma en un segundo período caracterizado por un conflicto predominantemente económico y despolitizado. Fue sólo después de la caída de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-57) y la instauración del Frente Nacional (1958) que cesaron las hostilidades bipartidistas. La tercera etapa se inicia a principios de los años 60 y está marcada por la actividad de los “bandoleros”.

Durante el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-62) los bandoleros fueron vistos como los principales enemigos del Estado. Pusieron en peligro la estabilidad del nuevo sistema político, basado en la paridad entre Liberales y Conservadores en la ocupación de los distintos cargos de la administración pública y en el compromiso de alternar la presidencia a lo largo de dieciséis años. Aunque no es claro hasta qué punto el exclusivismo político del Frente Nacional contribuyó al auge del bandolerismo, muchos investigadores relacionan esa última fase de La Violencia con el conflicto armado actual (Pécaut, 45-49 y Uribe, 43-52). Señalan que los líderes del Frente Nacional, a través de una amplia amnistía, lograron la desmovilización de la mayoría de los bandoleros. Por otra parte, algunos enclaves rurales de filiación marxista – las llamadas “repúblicas independientes” o autodefensas campesinas – se resistieron y fueron combatidos militarmente. Finalmente, el bombardeo de Marquetalia en mayo del 1964 y la consiguiente formación de las FARC marcaron el fin de la época de La Violencia como momento “histórico” y, al mismo tiempo, el inicio del complejo entramado de las múltiples violencias actuales.

No obstante, considerando las más de 200.000 víctimas, los millones de refugiados y los incalculables daños materiales que dejó La Violencia, es extraño que la época no haya recibido la atención debida por parte de las élites políticas. Aunque la mayoría de los historiadores ve en ella la ruptura más dramática en la historia colombiana del siglo XX, no fue reconocida como

tal por las oligarquías de la época. Aparentemente los líderes del Frente Nacional no veían con claridad que un acuerdo entre las dos entidades políticas tradicionales – vistas como “naturales” – no era la medida apropiada para poner fin a la matanza. No comprendían que los grupos armados ya no luchaban por el Directorio de algún partido sino por la propiedad de tierras o contra el gobierno. Políticos como Alberto Lleras creían que era suficiente fortalecer las instituciones del Estado y convocar elecciones para alcanzar la paz. Como la guerra había empezado a raíz de diferencias políticas, podía también, en teoría, finalizarse mediante un acuerdo político.

Ignorando por completo el carácter económico, social y revolucionario de la “nueva” violencia, las élites prefirieron hacer caso omiso del pasado sangriento. Así, como indica Darío Acevedo Carmona, ya el documento fundacional del Frente Nacional, el Tratado de Benidorm, fue concebido como un “pacto de olvido” por sus artífices Laureano Gómez y Alberto Lleras (Acevedo Carmona, 229-236). Por lo tanto, la retórica política en los primeros años del Frente Nacional giraba alrededor de tres elementos discursivos: paz, reconciliación y olvido. Los líderes políticos subrayaron la importancia de olvidar el pasado, “por el bien de todos”, a través de numerosos debates parlamentarios, de la prensa y de eventos públicos.

4. ¿Memoria prohibida?

Teniendo en cuenta el alto nivel académico de los estudios sobre La Violencia – que, en su mayoría, están lejos de omitir la responsabilidad histórica de las clases dirigentes – es difícil de comprender por qué la conexión entre la investigación y la esfera pública es tan débil. Mientras en algunos países europeos y latinoamericanos, el pasado violento ha contribuido no sólo a la producción de una vasta literatura científica, sino también a la formación de un discurso histórico ampliamente aceptado, en Colombia la época de La Violencia se presta a muy diversas interpretaciones, muchas veces sin argumentos sólidos. Hoy en día ya no es tan fácil poner en duda públicamente puntos como el carácter autoritario e inhumano de las dictaduras militares del Cono Sur o la naturaleza racista del antiguo régimen de Sudáfrica; ni hablar del discurso cuasi oficial sobre el holocausto en Alemania. Pero ¿qué sucede en Colombia? Atrapados en un conflicto que no parece tener inicio ni fin, la mayoría de la gente ha perdido todo sentido de su historicidad. Se ha impuesto un relato totalizador del pasado, en el cual La Violencia aparece como un episodio indefinido dentro de una serie de desastres. En este sentido, se trata de un pasado que no pasa. Tal vez es por eso que las élites de hoy se dejan impresionar tan poco por los resultados de la investigación histórica y siguen negando que sus antecesores fueran los principales responsables del conflicto.

¿Cómo se explica este hecho? Sostengo que la memoria histórica de La Violencia es aún muy fragmentaria y está lejos de representar un discurso coherente. A excepción de algunas comisiones poco exitosas, no ha habido hasta ahora ningún intento de institucionalizar la recuperación del pasado violento. Refiriéndose a esta situación, Gonzalo Sánchez habla acertadamente de “memoria prohibida” (Sánchez, *Guerras*, 83). No obstante, tampoco se puede omitir la existencia de diversos actores sociales que lucharon por una versión crítica

y multidimensional de la historia. A lo mejor, algún día, estas voces en su conjunto formarán un discurso histórico capaz de romper con el pacto de olvido impuesto “desde arriba”. Por el momento hay que constatar que las voces subalternas están lejos de expresarse por medio de canales institucionales, lo cual tiene mucho que ver con la debilidad crónica de la sociedad civil en Colombia. Debido a un ambiente de violencia y amenazas no se ha podido desarrollar un discurso crítico alternativo. Es por eso que la “contra-memoria” se limita a algunas representaciones particulares, en su mayoría también elitistas, como por ejemplo en las esferas del arte, la literatura, el cine o el teatro.

4.1 EL DEBATE MEDIÁTICO SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA

Una revisión sistemática de los editoriales y columnas de *El Espectador*, *El Tiempo*, *La República* y *El Siglo* desde mayo del 1957 hasta finales del 1962, muestra cómo las élites se aprovecharon de sus estrechos vínculos con la gran prensa para difundir sus interpretaciones acerca de La Violencia. El siguiente análisis permite identificar algunas tendencias generales. Resulta claro que el discurso más importante, por lo menos en el sentido cuantitativo, fue el de “perdón y olvido”. Desde el inicio del Frente Nacional, los líderes de ambos partidos difundieron su visión del pasado por todos los medios masivos. El lema más repetido en esa fase fue la famosa tríada de “paz, reconciliación y olvido”, con fuerte énfasis en la última reclamación, o como lo formula un editorial de *La República*:

Nada justifica hoy la violencia, sobre la cual sólo florecen el despotismo y la anarquía. El acuerdo de las dos colectividades históricas se ha hecho sobre la base de un total olvido del pasado a base de la condenación implacable del bandolerismo y del delito. La venganza y la retaliación harán de Colombia un vasto cementerio, un campo de desolación y de ruina (29 de septiembre de 1957).

De todos modos, al inicio de los años 60 ya se comienzan a oír las primeras voces de protesta contra la visión conciliadora y encubridora del Frente Nacional, cuyo fundamento ideológico está basado en un pacto tácito entre las élites para no permitir discusiones sobre un pasado “problemático”. Mientras tanto, muchos de los responsables de La Violencia volvieron a ocupar cargos importantes en el nuevo gobierno. La continuidad personal del Frente Nacional fue tan abrumadora que una discusión abierta sobre las actuaciones individuales durante La Violencia habría puesto en peligro la estabilidad del sistema mismo. No obstante, algunos grupos de la izquierda, como por ejemplo el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), así como un pequeño círculo de intelectuales, cuestionaron públicamente el tratamiento de la historia llevado adelante por la sección dirigente del Frente Nacional. Un buen ejemplo de resistencia al discurso oficial representa el periodista y novelista Eduardo Caballero Calderón, autor de *El Cristo de espaldas* (1952), uno de los textos más leídos sobre La Violencia. En una columna de *El Tiempo* analiza con claridad los errores del Frente Nacional y critica los conceptos paternalistas de sus artífices. Según él, los sucesos sangrientos del 9 de abril representaban la reacción explicable de las masas oprimidas, la consecuencia lógica e inevitable de una política excluyente:

Mal educado el pueblo colombiano por un Estado inepto y arbitrario, que ha sido siempre extraño y hostil a la nación; concebido el Estado como una presa por los partidos; sin que la doctrina cristiana haya servido para morigerar las costumbres de los ciudadanos, para civilizarlos, para darles una conciencia del bien y del mal: era de presumir que el día en que ese pueblo reaccionara lo haría en forma salvaje y violenta. Se tuvo una primera muestra de lo que eran esas reacciones populares colombianas, verdaderamente sin Dios ni ley, cuando el 9 de abril se rompieron las esclusas y sobre el pueblo no pudo nada la acción de un Estado desacreditado e incompetente, ni le sirvió de freno una tradición religiosa y cristiana tan endeble que se le había olvidado” (8 de febrero de 1960).

Sin embargo, voces como estas eran muy escasas en los primeros años del Frente Nacional. Un análisis cuantitativo de la gran prensa muestra que entre mayo del 57 y finales del 62 sólo hubo un total de 20 contra-vozes explícitas, mientras que los editoriales y columnas a favor de la política de paz, reconciliación y olvido sumaban más de 200.

Algo similar sucedió en el Congreso de la República donde se dieron casi a diario debates sobre La Violencia entre los años 1957 y 1962. Muy pocas veces se hablaba de las causas del conflicto, sino más bien de las posibles medidas para acabar con él. Estas propuestas incluyeron por ejemplo leyes de amnistía y las llamadas Comisiones de la Violencia, a cuyo impacto me voy a referir más adelante. En general, predominó la tendencia a mostrar La Violencia como algo “ajeno” y “bárbaro”, por lo cual muchos congresistas subrayaron que provenían de regiones “civilizadas” donde no se conocía tal fenómeno, como muestra por ejemplo un comentario de Absalón Fernández de Soto, gobernador del Valle del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la guerra y tierra natal de los temidos “pájaros”:

Lo único que actualmente solicitan todos los municipios del Departamento en esa materia, es que no los incluyan en el grupo de las regiones bárbaras [...] La violencia fue una imposición venida de zonas altas, e inclusive para ejecutarla se importaron criminales de otras regiones, pues nosotros somos y seguiremos siendo un pueblo pacífico y tranquilo (Anales del Congreso 1959, N° 58, 660).

Se puede constatar que los diputados y senadores de los partidos tradicionales no tenían muchas ganas de “revivir” el pasado sangriento, en el cual algunos de ellos habían jugado un papel bastante negativo. En este sentido, les parecía oportuno evitar cualquier comentario sobre La Violencia. Sólo muy de vez en cuando hablaron en público sobre las consecuencias de la catástrofe, como por ejemplo a raíz de la publicación del libro ya clásico *La Violencia en Colombia* (1962-64) de Germán Guzmán Campos, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, el primer estudio académico acerca de las causas del conflicto.

Sin embargo, como ilustran las reacciones de la mayoría de los parlamentarios, casi no se discutía sobre el contenido del libro, el cual sirvió ante todo como un “arma política”. Un buen ejemplo de estas batallas nos da la discusión sobre el papel del político vallecaucano Gustavo Salazar García, a quien se

acusaba de haber estado implicado en diversos crímenes durante La Violencia. Representantes del Partido Liberal y del MRL lo acusaron en el Congreso de haber colaborado con el jefe de los “pájaros” del norte del Valle, el tristemente célebre León María Lozano, alias “El Cóndor”. En éste y en otros debates, *La Violencia en Colombia* fue usada para denunciar al enemigo político sin discutir en ningún momento sobre su contenido, como muestra la respuesta de Salazar García a sus adversarios:

Esta mañana, el Representante Ibarra tuvo la gentileza de mostrarme una especie de Biblia que se trajo ayer aquí, y en la cual se hace una alusión a mi nombre. Creí que se trataba de una investigación seria, que al fin escribir sobre la violencia en Colombia no era un negocio de gentes que borronean papel y hacen trabajar las imprentas dizque explicando los antecedentes de la violencia, y resulta a la postre que están haciendo simplemente un negocio que yo considero más indigno, deshonorables y mezquinos que el que utilizan para ganarse la vida y conseguir el dinero las cortesanas de que sabemos (Anales del Congreso 1962, N° 65, 859).

A largo plazo los principales resultados de la obra de Guzmán Campos, Umaña Luna y Fals Borda presentaron la falsedad del discurso oficial a un gran público. Sin embargo, no fue el principio de un “aprendizaje político” amplio, como lo habían esperado sus autores. Así, con motivo de la publicación del segundo tomo en 1964, Fals Borda escribe ya con cierta resignación:

Desgraciadamente, una vez amainada la tormenta político-literaria, luego de haberse proclamado otra vez lo demoníaco de la violencia, el país pareció volver a su nerviosa indiferencia respecto al más grave problema. Aunque en aparente retirada, la violencia sigue siendo cosa común, a la que los colombianos habremos de acostumbrarnos, creando personas abúlicas y muertas en vida en las regiones donde reina; y gentes egoístas, apáticas y miopes en las ciudades donde se creen lejos del flagelo (Guzmán Campos et al., II, 14).

Aparte de la tendencia claramente identificable de llamar al olvido, también había quienes preferían una versión apologética de la historia. Aunque Alberto Lleras y sus seguidores habían exigido no profundizar en el tema de La Violencia, algunos grupos dentro de las élites estaban ansiosos de encontrar “culpables”. Los hallaron, por supuesto, fuera de la clase política. En esta tarea de falsificación de la historia se destacaron sobre todo políticos conservadores, quienes alegaron la supuesta “barbaridad” y la falta de “cultura” de las masas populares como principales causantes de La Violencia. Así, sin diferenciar, crearon la imagen, muchas veces racista, de un “pueblo degenerado y mil veces tarado” como afirmaba otro editorial de *La República*:

Nunca pudiera uno imaginarse que en el pueblo existiera tal capacidad delictiva en estado latente, porque sólo en un medio corrompido, sin educación, sin cultura religiosa, sin moral, degenerado y mil veces tarado, pueden registrarse actos de tanta barbarie y crueldad como el vil y mil veces execrable asesinato de Gaitán, y la destrucción de Bogotá (8 de octubre de 1957).

El contexto socioeconómico de la época fue raras veces tratado por los periodistas y columnistas de la gran prensa. En vez de hablar sobre los permanentes fracasos de la élite en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, su oposición a una verdadera reforma agraria, la no aceptación de la función social de la propiedad o la persistencia del clientelismo, impulsaron debates superficiales sobre la reintroducción de la pena capital o las diversas explicaciones etno-culturales de La Violencia. Además del “oscuro e inepto vulgo” (*El Siglo*, 21 de marzo de 1953), como decía el jefe del partido Conservador, Laureano Gómez, cuando se refería al pueblo, las élites también identificaron a dos figuras históricas como instigadores de La Violencia: Gustavo Rojas Pinilla y Fidel Castro. Poco después de la caída del “jefe supremo” los medios informaron con gran satisfacción que Rojas Pinilla había sido el principal responsable de La Violencia. Según *El Siglo*, periódico de propiedad de Gómez, el ex presidente conservador no hizo otra cosa que combatir la “tiranía”:

El cuadro desolador que presenta la República, es obra directa, casi exclusiva de la plaga trecejunista que asoló los contornos colombianos. Hoy la vemos que se retuerce soberbia y orgullosa en los estertores de la muerte frente a la presencia portentosa de un hombre, cuyo mayor orgullo es haber mantenido incontaminado a un pueblo, a esos viejos soldados de la causa firmes y seguros en la resistencia contra la tiranía (13 de junio de 1958).

Aquel discurso sólo fue igualado por el no menos falso sobre la participación activa de agentes comunistas en la primera fase de La Violencia. Según esta versión, especialmente popular después del 1959 – año de la revolución cubana, fueron comunistas procedentes de la Habana y de Moscú quienes instigaron La Violencia, desde el Bogotazo hasta el bandolerismo. En este sentido, escribe *La República*:

[Castro] detenta el gobierno de la isla antillana, donde ha establecido la tiranía más sangrienta de la historia humana. Desde allí exporta revoluciones a toda América, inclusive a nuestra patria que recibió su primer zarpazo el 9 de abril de 1948 cuando contribuyó a los incendios y ‘hasta mató un cura’, según la conocida frase (25 de febrero de 1961).

4.2 El papel de la historiografía

En los primeros años del Frente Nacional no sólo predominaba la negación de La Violencia en el ámbito político, sino también en las universidades y las escuelas. Al mismo tiempo que el gobierno prefirió hablar del “posconflicto”, a sabiendas de que la guerra no se había acabado, muy pocos académicos se atrevieron a impugnar esta posición. La falta de voces críticas en esa época se explica por el mal estado del sistema escolar y universitario en general, cuya financiación estaba siempre al borde del colapso. No había casi bibliotecas y los pocos archivos existentes, incluyendo el Archivo Nacional, no eran precisamente instituciones profesionales ni estaban sistemáticamente organizadas, a diferencia de hoy en día. En este contexto, el gobierno no sólo mostraba un desinterés total en la conservación de los documentos de la época; también hizo lo suyo para hacer desaparecer los últimos restos de la gran “vergüenza” que era

para ellos La Violencia. Así, como indica Gonzalo Sánchez, fueron destruidos en 1967 muchos documentos importantísimos de los años 1949 a 1959 en el Archivo Nacional por parte de funcionarios del ministerio de Gobierno, oficialmente por el “mal olor” de los expedientes y el “mal estado” de la institución en general. Que se declararan justamente aquellos documentos sobre la fase más sangrienta de La Violencia como “archivo muerto” tiene, a mi modo de ver, una respuesta obvia: no se trataba de eliminar el “mal olor” de unos papeles, sino más bien el “mal olor” de toda una época, llena de “problemas” en la perspectiva de las élites tradicionales. Por eso decidieron borrar esa época de la memoria histórica, representada por el archivo (Sánchez, “El compromiso”).

Al paso que se fue derrumbando el sistema escolar y universitario en los años 40 y 50, ganó fuerza la historiografía oficialista. Mientras en las universidades ni siquiera existía la materia de Historia, los miembros de la conservadora Academia Colombiana de la Historia velaban sobre la enseñanza pública y la investigación. Creada en los años del doble trauma de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la separación de Panamá (1903), la Academia había adoptado la “misión” de trabajar en adelante para la unidad del país y la construcción de la nación por medio de la historiografía. La simbiosis entre la esfera de la política y el oficio del historiador era total, ya que la mayoría de sus miembros se destacaron como políticos o figuras públicas. Por eso prefirieron escribir una historia basada en los grandes logros de sus propios antepasados, cuyas hazañas generalmente habían tenido lugar en el “glorioso” siglo XIX (König, 101-121). De esta manera, quedó excluida la categoría de “historia contemporánea”, como demuestra también un decreto ministerial del año 1948. Expedido poco después de los sucesos “barbáricos” e “inexplicables” del 9 de abril, pone de manifiesto qué se entendía bajo el término “Historia Patria” y como ésta sería impartida en las escuelas:

Que el conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la veneración por los símbolos de la nacionalidad son elementos inapreciables de fuerza social, de cohesión nacional y de dignidad ciudadana;

Que la educación debe tener una función eminentemente social, y todas las materias de los pénsumes y programas escolares deben estar orientadas a formar en las nuevas generaciones hábitos democráticos, de decoro personal y de orgullo nacional;

Que los graves acontecimientos que han ocurrido en los últimos tiempos han agitado a la República y han puesto de manifiesto, una vez más, y con caracteres de gran apremio, que el estudio concienzudo de la Historia Patria y la práctica de las virtudes cívicas por todos los hijos de Colombia debe ser preocupación permanente y desveladora del Gobierno (Decreto 2388 del 15 de julio de 1948).

Se trataba de una visión paternalista y conservadora, en la cual las “masas” eran vistas como un mero objeto sin potencial de cambio alguno, o en palabras del presidente Alberto Lleras: “Las grandes revueltas del espíritu colombiano han venido, casi sin excepción, de arriba hacia abajo, del poder hacia el pueblo, y se escriben primero en las leyes como un estímulo para que prendan en el corazón de las masas [...]” (Lleras, 101).

Para la enseñanza de la Historia Patria en las escuelas, se utilizó durante mucho tiempo, en algunos casos incluso hasta los años 80, la clásica obra de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, *Historia de Colombia*. Originalmente, ésta ni siquiera había sido escrita para la escuela, pues era el producto de un concurso abierto del año 1910 (fecha del primer Centenario). Por lo tanto, el enfoque del libro estaba en el período de 1810 a 1830, es decir los años “heroicos” de la república. Con el tiempo se publicaron numerosas ediciones ampliadas, algunas especialmente para la enseñanza pública, así por ejemplo la de 1967 para el uso en escuelas secundarias. Como se podrá apreciar, las “ampliaciones” consistían en realidad de breves enumeraciones de hechos. La historia contemporánea era tratada de una manera acrítica y muy superficial. Así, por ejemplo, la época de La Violencia ni siquiera aparecía bajo este nombre. En lugar de esto, los autores nos informan sobre el papel “pacificador” de dos de los arquitectos más importantes del Frente Nacional, Alberto Lleras y Laureano Gómez (1950/51), sin mencionar – obviamente – que el mayor número de muertos de La Violencia se contó durante el corto gobierno del último personaje. En el único párrafo que hace mención del conflicto, la culpa es de los “comunistas”. Dice: “En algunos sectores de la República se habían presentado ya casos de violencia, saqueos, pillaje y asesinatos, consecuencia todos ellos de la agitación política, de la oposición tenaz a las medidas del Gobierno y de los manejos del comunismo” (Henao y Arrubla, 933).

Es solo a partir de los años 60 que se observa en el mundo académico un tratamiento más profundo del tema. Mientras que la historiografía oficialista, simbolizada por la obra de Henao y Arrubla, pierde importancia, ganan terreno los académicos de tendencia marxista. Al comienzo de esa década se publican los primeros estudios que contienen una crítica explícita al comportamiento de las élites durante La Violencia. Todavía de una manera muy esquemática, incluyendo la inevitable retórica de la lucha de clases, estos trabajos representan el comienzo de la historiografía contemporánea en Colombia. Aunque los historiadores marxistas no hayan ejercido mucha influencia sobre el discurso político, ni sobre la enseñanza de la historia en los colegios, la cual seguía en manos de la Academia, sí contribuyeron a un cambio profundo en las universidades. Después de esa ruptura cada vez más investigadores se interesaron por las manifestaciones culturales y regionales de La Violencia, alejándose gradualmente del marxismo dogmático.

Con el nacimiento de la así llamada Nueva Historia hacia finales de los años 70, los resultados de la investigación histórica empezaron a aparecer en los manuales escolares. Hoy en día, los libros de texto más actuales presentan La Violencia como un conflicto multidimensional, dentro de su contexto histórico y con protagonistas concretos. Lo que todavía no suelen mencionar es la responsabilidad explícita de algunos miembros de la clase dominante. Además, figuras como Jorge Eliécer Gaitán o Alberto Lleras todavía son mitificadas (véase p. ej. Gómez de Baruffol, Lavacude Parra, Samacá Prieto, Melo y Díaz Rivero, Vargas Poo y Rodríguez). Así, una figura notoria como Laureano Gómez es presentada de una manera muy poco crítica en muchos textos escolares, en este caso como “abogado de paz”:

El 7 de agosto de 1950 se posesionó como presidente de la república. A pesar de que sólo gobernó algo más de

un año, hasta el 5 de noviembre de 1951, adelantó una importante gestión en obras públicas y campañas de salud. Posteriormente jugó un papel muy importante en la pacificación del país, creando, con la participación de los líderes liberales, el Frente Nacional (Gómez de Baruffol, 72).

Finalmente, hay que añadir que la enseñanza de la historia en las escuelas carece cada vez más de importancia. Aunque los libros de texto se han vuelto más críticos desde la mitad de los años 80, hoy en día se imparte cada vez menos historia en las aulas y, además, la materia ha sido fusionada con ciencias sociales y geografía (Sociales). Es difícil estimar lo que esto significa a largo plazo para la consciencia histórica de los colombianos.

4.3 Comisiones y amnistías

Aparte de las fuentes mencionadas hasta ahora, es decir la prensa, los debates parlamentarios, la historiografía y los manuales escolares, se podrían analizar otras más, como por ejemplo museos o monumentos. Sin embargo, debido al espacio limitado de este ensayo, quisiera enfocarme brevemente en un ámbito relativamente poco investigado hasta ahora: las Comisiones de la Violencia y las amnistías.

Como ya dije, al inicio del Frente Nacional existía un consenso amplio acerca de la interpretación de La Violencia. Los dos partidos tradicionales estaban de acuerdo en que la “pacificación” del país sólo era posible mediante “perdón y olvido”. Para lograr tal fin, no era necesario elaborar leyes específicas para “dominar” el pasado. En lugar de esto, los líderes del Frente Nacional hicieron uso de los medios de comunicación, de oraciones públicas y directivas internas para moldear el discurso político. Como los medios masivos más importantes se encontraban en manos de pocas familias selectas, las élites no se veían obligadas a emitir una “ley de punto final”.

Aparte de estas medidas más bien intuitivas y descentralizadas, también se aplicaron unas “estrategias del olvido” más directas, es decir estatales. Aunque el gobierno no se atrevió a crear un “ministerio del olvido”, se ofrecían ciertos instrumentos para lograr el objetivo deseado: borrar de la memoria la época de La Violencia, sus causas y sus consecuencias. Las herramientas más importantes eran la creación de las Comisiones de Rehabilitación y de Investigación, así como las leyes de amnistía. Aunque ambas medidas tenían oficialmente un carácter “humanitario” y “pacificador”, servían en primer lugar para legitimar el Frente Nacional y para deshacer la culpa histórica de la clase política.

En los primeros tres años del nuevo gobierno, ambos partidos declararon que iban a eliminar el bandolerismo por medios políticos y sociales. Como Alberto Lleras y sus seguidores querían distinguirse de la anterior dictadura militar, hicieron énfasis en el rechazo de cualquier actividad represiva (*El Espectador*, 13 de junio de 1958). Por eso el gobierno optó inicialmente por las Comisiones y por proyectos sociales. Se trató de la así llamada Comisión Especial de Rehabilitación, la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, así como diversos organismos de asistencia social y colaboración técnica, como por ejemplo Acción Comunal y los Equipos Polivalentes (Sánchez y Meertens, 227).

Sin embargo, el alcance de las Comisiones era bastante limitado, debido a que se transformaron muy rápido en instrumentos del clientelismo rural. Así, por ejemplo, algunos gamonales regionales obtuvieron el control de los fondos destinados a la población civil y los distribuían entre sus propios seguidores. Según Alfredo Molano, la Comisión Investigadora sirvió al gobierno como una especie de “caballo de Troya”, de modo que sus miembros tenían que establecer contactos con los bandoleros para “promover la paz”, pero de hecho también proveían de informaciones al ejército. Esta combinación de medidas “blandas” con medidas “duras” a partir de 1959, hizo que una gran parte de los bandoleros se entregaron a la justicia, amparados por leyes de amnistía (Molano, 65 s.).

Las Comisiones de la Violencia servían casi exclusivamente para mejorar las condiciones materiales del campesinado empobrecido y sus miembros escribían amplios informes acerca de las condiciones de higiene, la vivienda y la alimentación. Desde el inicio, el gobierno dejaba claro que no deseaba ningún estudio profundo sobre las causas del conflicto. Por lo tanto, las Comisiones trabajaban – posiblemente sin darse cuenta – en la legitimación del Frente Nacional y no por una paz duradera. Así también lo recuerda uno de los integrantes de la Comisión Investigadora, el padre Germán Guzmán Campos:

Sin lugar a dudas estas motivaciones traducen esa gigantesca ingenuidad que trastrueca en virtud patriótica lo que es marrullera demagogia. En un contexto interpretativo posterior he encontrado dos respuestas: una, medularmente clasista y oligárquica: la Comisión se creó para buscar el retorno al estado de derecho, impidiendo la toma del poder por el pueblo. Es lo que se ha llamado ‘legitimación del Frente Nacional’. La otra respuesta es marxista: ve en la Comisión un instrumento más, utilizado por la clase en el poder para reproducirse y perpetuar su dominación a través del Estado (Guzmán Campos, 353).

Algo parecido pasó con las leyes de amnistía emitidas el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 1958, cuyo fin era acabar con el bandolerismo (Decreto 0328 y Decreto 2582). Según el presidente Lleras, a quien no le gustó la palabra “amnistía”, se trataba simplemente de una “suspensión de penas”, debido al hecho de que los decretos sólo eran válidos en algunos departamentos de Colombia. Además del objetivo oficial de terminar la guerra, las élites también pretendían borrar su propia culpa de la memoria histórica. En este sentido, les convenía que sólo los miembros de las bandas “políticas” tuvieran el derecho de integrarse nuevamente en la sociedad, mientras que los bandoleros “apolíticos” o “comunistas” seguían siendo perseguidos por el ejército (Decreto 0011 del 25 de mayo de 1959).

En la práctica, las leyes de amnistía fracasaron porque muchos de los victimarios de La Violencia no eran “políticos” en el sentido partidista, sino simplemente habían asesinado y desplazado por motivos económicos. Como el gobierno no había establecido ningún mecanismo de prueba, estos delincuentes no tenían mayor problema en declarar su filiación partidista. El decreto solamente prevenía que los violentos tenían que solicitar la “suspensión de penas” directamente en la oficina del respectivo gobernador, el cual tenía el derecho de perdonar cualquier crimen ocurrido antes de 1959. Así, los decretos también se volvieron

una herramienta del clientelismo. En numerosos casos, los gobernadores departamentales hicieron uso de la medida para recompensar “lealtades” comprobadas durante La Violencia. Además, no pocos victimarios recibieron créditos estatales y tierras, con el fin de “integrarse” nuevamente en la sociedad. En algunos casos, incluso lograron legalizar a posteriori grandes territorios obtenidos de manera ilegal (Molano, 98 ss.).

Aparte de borrar su culpa histórica, las élites también tenían objetivos más sutiles al declarar las amnistías. Así, por ejemplo, creían necesario identificar algunos de los bandoleros como “rebeldes” que se habían opuesto a la dictadura militar, es decir, que estaban involucrados en una especie de “guerra justa”. Después de la amnistía estos guerrilleros estarían de nuevo unidos a su partido de origen: el Liberal. En un futuro cercano – de acuerdo con el cálculo de algunos políticos – podrían ser incluso fieles seguidores del sistema bipartidista, mientras que quienes negaban la “integración” debían ser perseguidos como “comunistas” y “enemigos de la nación”. Además de estas consideraciones, también había una razón más profana: las cárceles estaban llenas (Sánchez, “Rehabilitación”).

Aunque los líderes políticos a nivel nacional tenían un interés sincero en apagar la llama de la contienda en el campo, muchos gamonales regionales no compartían esta visión. Al contrario, usaron las leyes de amnistía para recompensar a algunos de los criminales más temidos por sus “servicios a Dios y a la patria”, lo cual generó nuevo rencor y envidia entre los seguidores del partido opuesto (Sánchez, “Rehabilitación”).

Por otra parte, muchas víctimas de La Violencia experimentaron las leyes de amnistía como otro golpe traumático y doloroso. En tales circunstancias no era fácil superar lo sufrido, sobre todo sin la aceptación de la culpa por parte de las élites. Sin el “perdón” de los victimarios, sin reparación material y simbólica, sin canales institucionalizados para discutir lo sucedido, los trabajos de la memoria y la rehabilitación de las víctimas estaban condenados al fracaso. Al igual que las Comisiones de la Violencia, las leyes de amnistía no fortalecieron la paz. A pesar del discurso oficial de “perdón y olvido” y una serie de decretos presidenciales para elevar el estándar de vida de la población rural, el gobierno no logró suprimir el trauma a fondo que dejó La Violencia. Como lo mostrarían los siguientes años con claridad, las “paz negociada” de la élites no duraría mucho.

Al creer que un conflicto que se había originado a raíz de diferencias políticas podría ser solucionado por medio de un acuerdo político, los políticos se habían equivocados. Después de que las leyes de amnistía perdieron su vigencia el 26 de julio de 1959, el nivel de violencia aumentó de nuevo y, bajo la influencia de la revolución cubana, tomó un rumbo más ideológico (Sánchez y Meertens, 227).

Así como la guerra continuaría en otras formas y con otros actores, la memoria de La Violencia sobreviviría en partes de la población rural y – a causa del desplazamiento masivo desde los años 50 – también en los barrios populares de las ciudades. Por eso y debido también a la postura de las élites de no discutir abiertamente el pasado sangriento, algunos grupos de la sociedad civil – fragmentada pero existente – colocan hoy en día el tema de La Violencia en la agenda pública.

5. Conclusión: ¿un país sin memoria?

Para concluir, ¿son acertadas las afirmaciones de Marco Palacios y Antonio Caballero de que las imágenes básicas sobre La Violencia se forjaron durante la primera fase del Frente Nacional y de que se trataba en ese entonces de un “pacto de olvido”? En caso de que sí, ¿es la Colombia de hoy un país sin memoria?

Sin lugar a duda, es reconocible el afán de la clase dirigente de llamar al olvido. En este sentido se puede decir que la política de los primeros años del Frente Nacional sigue teniendo efectos sobre nuestra manera de ver La Violencia, la cual ha tomado con los años un carácter borroso e indefinido para la mayoría de la gente. Sin embargo, no se trató nunca de un discurso elaborado, único y con un solo sentido. Siempre han existido voces críticas, incluso en la gran prensa y el congreso.

Así y todo, las escasas voces críticas de la época nunca fueron capaces de formar un discurso coherente, aunque el creciente número de comentarios en contra del Frente Nacional muestra que el oficialismo se encontraba algunas veces en la retirada. A pesar de esto, la afirmación revisionista de que los ensayistas e intelectuales de la época han contribuido a la difusión del relato de una “guerra permanente”, como sostiene por ejemplo Eduardo Posada Carbó (51 ss. y 256-303), se justifica solamente en parte. También es preciso señalar que el número de posibles receptores de este relato nunca ha sido muy alto. Colombia fue y sigue siendo un país con pocos lectores (Arnove, 385 ss. y Ministerio de Cultura). En la televisión, el medio de comunicación más utilizado por los colombianos, encontramos hoy en día más bien lo contrario de una versión crítica, puesto que el acelerado proceso de concentración de los medios ha acercado a los creadores de la “opinión pública” – sea cual sea su definición – aún más al oficialismo (Kusche, 585 ss. y Hennecke). Junto al relato de una “guerra permanente” el telespectador de hoy se enfrenta a diario con un discurso patriótico y neo-populista, difundido para encubrir las raíces históricas, socioeconómicas y políticas del conflicto. En la actualidad, el viejo dualismo de Liberales vs. Conservadores ha sido reemplazado por el nuevo dualismo de “patriotas” vs. “subversivos”, sin que se tolere una posición intermedia. Visto desde una perspectiva histórica, esto no es nada nuevo en Colombia, donde el poder mediático de los “presidentes letrados” del siglo XIX ha sobrevivido hasta nuestros días. Debido al carácter manipulador, dependiente y politizado de los medios de comunicación de masas, la centenaria tradición de una “prensa libre” representa un legado bastante ambiguo. Considerando esto, así como el alto grado de autocensura en todos los medios, creo que la persistencia del relato de una “guerra permanente” tiene que ver más con la memoria comunicativa de los pequeños grupos sociales, la cual se deriva principalmente de la tradición

oral, y no tanto de los escritos de algunos columnistas, ensayistas y novelistas.

En consecuencia, si el relato de los intelectuales críticos ha sido tan débil, ¿se puede afirmar lo mismo de las versiones oficialistas? En lo tocante a esta pregunta pienso que las pocas opiniones contrarias al discurso del *mainstream* no han dejado muchas huellas en la memoria histórica. Tal vez algunos disidentes, como el ya citado Eduardo Caballero Calderón – duramente criticado por Posada Carbó (219-224) – hayan exagerado en sus juicios, y al proponer la existencia de una “cultura de la violencia” también mostraron una actitud paternalista y de desprecio hacia los estratos bajos. Sin embargo, el mismo Posada Carbó admite que desconoce el impacto que hayan dejado los libros y columnas de Caballero Calderón. Aquí está el verdadero “problema”: Si no podemos hablar hoy en día de medios críticos e imparciales ni de la difusión total de un imaginario negativo de la nacionalidad colombiana, como supuestamente lo difundían Fernando Vallejo, William Ospina, Alfredo Molano, Antonio Caballero, Arturo Alape, entre otros, lo podemos afirmar aún menos para la época del Frente Nacional. En los dieciséis años del pacto bipartidista, la naciente clase media y algunos miembros de la élite fueron los únicos receptores de posibles relatos críticos. Sin embargo, con la llegada de la televisión en los años 50 y su posterior popularización a partir de los años 60 y 70, la visión oficialista del pasado siguió teniendo más cobertura que la alternativa crítica.

El último síntoma de la hegemonía de la visión oficialista es la casi total ausencia de La Violencia en la memoria histórica del país. Así, por ejemplo, es muy dicente que la exposición permanente en el Museo Nacional de Colombia termine con el 9 de abril de 1948. Al parecer todavía no existe la categoría de “historia contemporánea” en el espacio público. En este sentido, como decía el gran escritor y cronista Arturo Alape en una de las últimas entrevistas en *El Tiempo* antes de su muerte, el discurso oficialista acerca de la historia del siglo XX sigue aún vigente (26 de agosto de 2006). Es más, a la vista del controvertido proceso de desmovilización de paramilitares, en el marco de la así llamada Ley de Justicia y Paz (2005), me da la impresión que se repiten los mismos errores del pasado. Mientras que no se desmantelen las estructuras del narco-tráfico y del paramilitarismo, cuyos vínculos llegan hasta el núcleo del Estado, no se puede llegar a una paz duradera. Nuevamente las élites políticas están decretando “perdón y olvido” sin ocuparse de los problemas de fondo. Así, la deshistorización del conflicto armado en Colombia es casi total. Considerando los discursos oficiales del pasado y del presente, pienso que la respuesta a mi pregunta inicial es clara: La Colombia de hoy es un país sin memoria.

Notas

¹ Este ensayo es el resumen de una parte de mi tesis de doctorado sobre *La Violencia en la cultura de la memoria en Colombia* (en alemán: *Die Violencia in Kolumbien: verbotene Erinnerung? Der Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft, 1948-2008*), seleccionada por la *Asociación de Colombianistas* como mejor obra en historia y ciencias sociales presentada al *XVI Congreso de Colombianistas*. Agradezco a Herbert Tico Braun y a María Mercedes Jaramillo que me ofrecieron este espacio para abrir el debate sobre algunos de los resultados de la investigación.

Bibliografía

- Acevedo Carmona, Darío. “El Pacto de Benidorm o el olvido como antídoto para conjurar los fantasmas del odio y de la sangre”. En *Tiempos de Paz. Acuerdos en Colombia, 1902-1994*, editado por Medófilo Medina y Efraín Sánchez. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003, 229-236.
- Arrove, Robert. “Education Policies of the National Front”. En *Politics of Compromise. Coalition Government in Colombia*, editado por Ronald Hellman y Albert Berry. New Brunswick: Transaction Books, 1980, 381-411.
- Caballero, Antonio. “Prólogo”. En *Las guerras de la paz*, editado por Olga Behar. Bogotá: Planeta, 1986, 7-9.
- Decreto 2388 del 15 de julio de 1948. En *Enseñanza de la Historia Patria. Normas, estímulos, sanciones*, editado por el Ministerio de Educación. Bogotá: Imprenta Nacional, 1949, 6-10.
- Decreto 0328 del 28 de noviembre de 1958, Decreto 2582 del 11 de diciembre de 1958 y Decreto 0011 del 25 de mayo de 1959. Impresos en Alfredo Molano. *Amnistía y Violencia*. Bogotá: CINEP, 1978, 161-169.
- Gómez de Baruffol, Fanny Cecilia. *Ciencias Sociales 5: guía de recursos*. Bogotá: Santillana, 1999.
- Guzmán Campos, Germán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda. *La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. 2 tomos. Bogotá: Tercer Mundo, 1962-64.
- Guzmán Campos, Germán. “Reflexión crítica sobre el libro ‘La Violencia en Colombia’”. En *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, editado por Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda. Bogotá: CEREC, 1986, 349-366.
- Halbwachs, Maurice. *Les cadres sociaux de la mémoire*. Mouton: Archontes, 1976.
- Hennecke, Angelika. *Zwischen Faszination und Gewalt: Kolumbien – unser gemeinsamer Nenner*. Frankfurt: Peter Lang, 2006.
- Henao, Jesús María y Gerardo Arrubla. *Historia de Colombia para la enseñanza secundaria*. Bogotá: Librería Voluntad, 1967.
- König, Hans-Joachim. “Los caballeros andantes del patriotismo. La actitud de la Academia Nacional de la Historia Colombiana frente a los procesos de cambio social”. *Historia y Espacio* 15 (abril 1994), 101-121.
- Kusche, Dagmar. “Massenmedien in Kolumbien”. En *Kolumbien heute*, editado por Werner Altmann y Thomas Fischer. Frankfurt: Vervuert, 1997, 585-614.
- Lavacude Parra, Kenny. *Ciencias Sociales 9*. Bogotá: Santillana, 1999.
- Lleras, Alberto. *Sus mejores páginas*. Bogotá: Compañía Grancolombiana, 1960.
- Melo, Jorge Orlando y Gonzalo Díaz Rivero. *Raíces. Quinto curso de enseñanza básica primera*. Bogotá: Libros & Libres, 1989.
- Ministerio de Cultura. *Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia*. Bogotá: Fundalectura, 2006.
- Molano, Alfredo. *Amnistía y violencia*. Bogotá: CINEP, 1978.
- Nora, Pierre. *Les lieux de mémoire*. 7 tomos. París: Gallimard, 1984-1992.
- Palacios, Marco. *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994*. Bogotá: Norma, 2003.
- Pécaut, Daniel. *Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión*. Medellín: Hombre Nuevo, 2003.
- Posada Carbó, Eduardo. *La nación soñada*. Bogotá: Norma, 2007.
- Samacá Prieto, Nubia Elcy. *Ciencias sociales activas 5*. Bogotá: Santillana, 2000.
- Sánchez, Gonzalo. “Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/analisis-politico/ap4.pdf>.
- Sánchez, Gonzalo. “El compromiso social y político de los intelectuales”. Bogotá, 2000. http://www.mamacoca.org/sanchez_intelectuales.htm.
- Sánchez, Gonzalo. *Guerras, memoria e historia*. Medellín: La Carreta Histórica, 2006.
- Sánchez, Gonzalo y Donny Meertens. *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia*. Bogotá: El Áncora, 1983.
- Uribe, María Victoria. *Antropología de la inhumanidad*. Bogotá: Norma, 2004.
- Vargas Poo, Martín Eduardo y Claudia Alicia Rodríguez. *Espacios 9: historia y geografía*. Bogotá: Norma, 2001.